

# Las elecciones “libres”, otra vez...

**L**a Junta Revolucionaria de Gobierno ha planteado como alternativa de solución a la dramática situación que vive el país la celebración de elecciones libres para 1982. Con vehemencia cívica el Presidente de la JRG, Ing. José Napoleón Duarte, y el Ministro de Defensa y Seguridad Pública, Coronel José Guillermo García, han acudido a la cadena de radio y televisión a exponer la tesis de que los problemas sociales, económicos y políticos de El Salvador quedarán zanjados si las fuerzas en conflicto aceptan el reto de dirimir diferencias por medio del voto en comicios efectivamente libres.

El reconocimiento expreso de que el actual gobierno no sólo es transitorio, sino producto de un pacto entre el ejército y un sector de la Democracia Cristiana, reafirma el criterio de que para legitimar los actos gubernamentales es necesario el consenso popular. De ahí el planteamiento de convertir el voto en una arma que permita la elección de autoridades realmente representativas, dentro del esquema de democracia formal que constituye el basamento de las instituciones del Estado salvadoreño. El llamamiento a resolver la crisis de autoridad del Estado por medio de elecciones, en momentos en que hay grupos alzados en armas contra el modelo económico y el sistema político nacional, tiene por objeto apelar al viejo principio de la delegación de soberanía del pueblo en personas que asumen por designación popular los cargos más importantes del aparato estatal.

No es la primera vez en la historia del país que se acude al expediente electoral para tratar de recomponer las fuerzas sociales en pugna, aunque sí es el momento más crítico de la nación,

pues los ingredientes de la lucha no son meramente de disputa del gobierno por una u otra tendencia ideológica. La sociedad salvadoreña presenta las típicas características de una rebelión político-militar de la clase dominada contra la clase dominante y su brazo armado, histórica e institucionalmente considerado. Los márgenes de dominación económica han roto los límites de la tolerancia, de manera que no es posible un nuevo pacto constitucional sin cambios profundos en las estructuras sociales que hagan posible un nuevo Estado, una nueva sociedad organizada bajo lineamientos diferentes a los tradicionales. El esquema democrático liberal, plasmado en los contratos sociales de 1950 y 1962, no basta para encauzar la inquietud desbordada de las masas.

Hay que revisar todo el andamiaje doctrinario en que decansan las instituciones, de suerte que la convivencia y armonía que permiten el trabajo colectivo dentro de una paz siempre relativa, sea producto de una transformación que a todas luces es inevitable y necesaria. Esta visualización del problema parte de hechos ciertos, que todos los salvadoreños hemos presenciado a lo largo de dos décadas de “conciliación” nacional. Los recambios de personas en la cúpula del poder público, las reformas tibias y medrosas en áreas sensibles de la economía y la administración pública, no han traído la paz social. Han sido meros remiendos a un sistema global que lejos de “conciliar” los intereses de clases antagónicas, han agudizado la crisis de todo el Estado, sin que ningún sector haya quedado al margen de la conflictividad. El ejército mismo como estamento burocrático armado, al servicio se supone de

toda la nación, ha tenido que modular su participación al lado de los grupos de poder económico en la mayoría de las ocasiones, aunque hay que reconocer que en su seno los oficiales más jóvenes y los más concientizados han optado por reformas estructurales que se ven obstaculizadas por unos y otros grupos, bien por falta de una clara definición, bien por no contar con un real apoyo popular que respalde los cambios propuestos.

El Salvador no presenta, en estos momentos, condiciones propicias y adecuadas para celebrar elecciones. Antes de arribar al punto final de legitimación de un nuevo pacto social, hay que efectuar con seriedad política y capacidad técnica una profunda y radical modificación del modelo económico imperante a modo de modernizarlo y humanizarlo en las dimensiones de las exigencias populares, a la vez que se cambie, por completo, el sistema político que ha permitido la desnaturalización de las funciones eminentemente técnicas y profesionales de las fuerzas armadas en un largo proceso de corruptela y negación de la soberanía popular.

Mientras persista el actual modelo de dominación económica que hace más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, no es posible hablar de elecciones. Carece de sentido y de credibilidad recurrir a las urnas para resolver la cuestión, cuando todos los mecanismos y medios de producción están en poder de una clase que, con su influencia y su determinación, anulará la voluntad popular incluso antes de llegar a manifestarse ésta en las urnas. Sin reformas sociales efectivas, reales, no es posible el camino electoral. Conviene meditar en esto antes de caer en la trampa de convertir el voto en un arma inútil. La posesión exclusiva de los medios de difusión del pensamiento orientará los resultados hacia el pasado, recurriendo al expediente de la exclusión y la censura de aquellas tendencias que no favorezcan el actual estado de cosas. Piensan mal quienes opinan que la oligarquía permitirá un clima adecuado para que las fuerzas políticas se disputen en poder del Estado, sin manipular la opinión a su favor y de sus aliados dentro y fuera del ejército.

En cuanto al sistema político salvadoreño hay que anotar que ha hecho crisis desde hace más de una década. La sociedad política, los partidos ideológico-permanentes y los grupos de presión no han cumplido sus propósitos y programas, en razón de que el ejército ha asumido el

papel de partido del status quo en nombre de una falsa teoría de seguridad nacional y en nombre, también, de familias oligárquicas que en lugar de desarrollar integralmente al país dentro de un capitalismo moderno, se han dedicado a explotar la mano de obra barata en plantaciones de café, algodón y azúcar que les ha proporcionado riquezas y privilegios intolerables. El ejército, propiamente sus altos mandos, han estado a las órdenes del gran capital. En tal sentido no sólo han protegido la gran propiedad privada en contra de la función social, sino que han hecho el papel de administradores de un Estado que cada día ha ido perdiendo su razón y sentido en cuanto a su carácter democrático nacional. Embarcados en la conducción del gobierno, el ejército ha tenido que buscar los medios más innobles y espúreos para mantener su cuota de poder político. De ahí que cada cierto tiempo haya recurrido a las elecciones para "legitimar" el control de los aparatos gubernamentales, sosteniendo de palabra los postulados de la democracia representativa e incluso de la democracia social, pero apoyándose en las armas, el fraude y la corrupción para arrebatarse el triunfo a las facciones políticas que se le han opuesto en distintas oportunidades. Esta situación no puede seguir, sin que se produzca la reacción airada de sindicatos, gremios, asociaciones, partidos políticos e instituciones que repudian los métodos, formas y medios actuales de ejercicio del poder público.

Es muy probable que en las FFAA se haya dado el fenómeno de la concientización sobre el problema señalado y que exista, en esta ocasión, el deseo y la necesidad histórica de un repliegue de la esfera de la política partidista. Es muy probable que la experiencia haya enseñado que el papel del ejército es otro, muy distinto de la actuación hasta ahora asumida. Todo ello es posible; no obstante cabe la pregunta: ¿hasta dónde el estamento militar está educado para situarse en un carácter técnico, de apoliticidad relativa, a la búsqueda de su propia misión, en un país estancado socialmente por tanto tiempo?

La JRG ha nombrado ya a los nuevos miembros del Consejo Central de Elecciones. Comienza a escucharse la misma cantinela de siempre: "esta vez sí habrá elecciones libres. El sufragio será respetado. No más fraude. Ganará el que obtenga la mayoría de votos. La voluntad popular será respetada". ¿Acaso no se ha dicho siempre lo mismo? El Salvador no goza de comicios libres desde 1931, a pesar de las declara-

ciones retóricas de gobernantes, ministros de Estado, jefes del ejército, miembros del propio Consejo Central de Elecciones que, a la hora de la verdad, han avalado el fraude por muy honestos y sinceros que fueran sus propósitos al aceptar los cargos.

Creemos que mientras el país no corrija sus fallas estructurales y mientras no se entre de lleno a un proceso de pacificación y democratización de amplio pluralismo ideológico, las elecciones son una mentira en la cadena de engaños y promesas de los altos mandos del ejército y, ahora, de la Democracia Cristiana, convertida en partido oficial por obra y gracia del pacto palaciego del 9 de enero de 1980.

Las circunstancias no han cambiado; por el contrario, evidencian un alto grado de autoritarismo militar y exclusión política, proclive en muchos aspectos a configurar la hegemonía de un reducido grupo sobre la totalidad de la población.

Estimamos que antes de convocar a elecciones es necesario e imprescindible que se creen las condiciones mínimas de confianza política que reclama el país. En este sentido hay que proceder a: 1. Levantar el Estado de Sitio, la Ley Marcial y el Toque de Queda; 2. Derogar todos los decretos de militarización de la vida social del país, en particular los decretos 296 y 507 que constituyen un valladar para la organización y manifestación de los distintos grupos y partidos políticos; 3. Garantizar plenamente la existencia y actividad de los sindicatos, gremios y asocia-

ciones que tienen por objeto la defensa de los derechos sociales y políticos garantizados por la Constitución Política de 1962; 4. Hacer efectiva una total amnistía para todos los ciudadanos que hayan tenido participación en los sucesos políticos de 1970 a 1981; 5. Poner en inmediata libertad a los reos políticos y dar las facilidades para que regresen al país todos los emigrados políticos, sea cual fuere la ideología que profesen.

Como se advierte, la creación de un clima político propicio para la celebración de elecciones requiere de medidas de alta política que por el momento el gobierno no está en capacidad de ofrecer y menos de garantizar. De ahí que el simple llamado a elecciones libres suene a demagogia o cuando menos a un recurso sin ninguna sustentación en el orden de los acontecimientos que vive el país.

Es evidente que la salida propuesta de "elecciones libres" no es viable, por cuanto el país se halla envuelto en una terrible guerra civil y en un estado de gran violencia y conflictividad social, cuyos actores, por un lado, son el ejército y la democracia cristiana y por otro un amplio espectro de grupos, partidos, sindicatos y gremios que conforman la oposición política y militar al actual sistema económico, político y social.

En consecuencia, las elecciones "libres" otra vez, no son ninguna alternativa para el país.

I.L.V.

Marzo de 1981.